

2.3. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 2-6)

—

2.3. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 7-10)

ANNA PALLARÈS-SERRANO

*Profesora colaboradora permanente de Derecho Administrativo / Professora
col·laboradora permanent de Dret Administratiu*

Universitat Rovira i Virgili

Los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en materia medioambiental realizados desde el comienzo del año 2010, que merecen ser comentados por su trascendencia, tienen una temática y problemática diversa que no permite una agrupación por bloques, de manera que presentaremos cada una de las sentencias de manera singularizada.

En materia de planificación hidrológica nos encontramos con la *STSJ Cataluña 5/2010, de 4 de enero*, a resultas de la interposición por Endesa Generación, S.A. de recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado, el 4 de julio de 2006, por el Govern de la Generalitat de Cataluña que aprueba el Plan sectorial de caudales de mantenimiento de las cuencas internas de Cataluña. La parte actora solicitaba en la demanda la estimación del recurso declarando la nulidad de pleno derecho o, subsidiariamente, la anulación del plan impugnado basándose en varias consideraciones jurídicas, entre otras, la incompetencia de la Generalitat para fijar los caudales de mantenimiento y que el plan impugnado impedía a la parte actora cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa del sector público. Hemos de saber, en relación al caso, que Endesa Generación S.A. tiene 11 centrales hidroeléctricas en funcionamiento en las cuencas internas de Cataluña que se ven afectadas por las disposiciones o determinaciones del plan impugnado, empezando por los caudales de mantenimiento y acabando por la tasa de cambio que impide que dichas centrales puedan prestar servicios complementarios, y también se impide el cumplimiento del Plan de reposición del Servicio de Aragón y Cataluña, aprobado por Red Eléctrica de España.

Al respecto, la Sala no aprecia el defecto de competencia que se denuncia recordando que el Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos se fijarán en los planes hidrológicos de cuenca y que en el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña se dispone, en el artículo 12, que el plan sectorial de caudales de mantenimiento lo han de redactar la Administración hidráulica y el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, con el objetivo de garantizar un nivel admisible de desarrollo de la vida acuática. En relación al motivo de impugnación que señala que el plan de caudales de mantenimiento impide a la parte actora cumplir con sus obligaciones de producción energética y de prestación de servicios, la Sala, de acuerdo con el texto Refundido de la ley de Aguas, parte del razonamiento de que los caudales ecológicos o las demandas ambientales se han de considerar como una restricción que

se impone sobre cualquier otro sistema de explotación, sea este hidroeléctrico o no. Además, los argumentos y la prueba practicada para acreditar las repercusiones para Endesa Generación S.A. de la fijación de la tasa de cambio del caudal, que amortigüe y atenúe los cambios en el régimen de caudales manipulados, no afectan a los motivos que sustentan su previsión que son, como en el caso del establecimiento de los caudales ecológicos, el mantenimiento de la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera.

En el ámbito de la protección de la biodiversidad destacamos la *STSJ Cataluña 76/2010, de 28 de enero*, que se dicta a consecuencia de la interposición del recurso contencioso administrativo 599/2006, por parte de D. Adrián, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, de 21 de diciembre de 2005, desestimatoria de la reclamación formulada contra el acuerdo dictado por la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona, por el que se impone una sanción por infracción administrativa de contrabando, en cuantía de 39.848,64 euros. En esta sentencia, la Sala considera probado que, de los 216 ejemplares de tortugas mediterráneas *Testudo Hermannii*, que tenía D. Adrián en su finca de Vilassar de Mar, 54 tortugas no habían sido criadas en cautividad sino que eran objeto de previo tráfico ilícito y, por tanto, queda acreditada la tenencia ilícita de 54 ejemplares de tortuga testudo hermanni no justificadas por el propietario. En relación al resto de tortugas no ha sido negado que algunos de los ejemplares (dos en principio y siete u ocho posteriormente) le hubieran sido regalados ni que estos ejemplares hayan producido, a su vez, crías. A partir de estas constataciones se determina que el artículo 11 en relación con el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Represión del Contrabando considera como infracción administrativa de contrabando la realización, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, de *operaciones* de importación, exportación, comercio, *tenencia* o circulación de especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, CITES y en el Reglamento (CEE) número 3626/82, del Consejo, de 3 de diciembre de 1982. Por lo tanto, vemos que la infracción administrativa, según la Sala, se consuma con la mera tenencia de ejemplares de determinadas especies sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos. Es evidente que la pretensión que late en esta normativa es evitar que las operaciones citadas mermen las poblaciones de

flora y fauna en sus habitats naturales, rompiendo así con su equilibrio ecológico, y acaben por poner algunas especies al borde de la extinción.

En sede de residuos nos parece importante señalar la *STSJ Cataluña 98/2010, de 4 de febrero*, que corrobora el trascendente papel que ha de jugar la Administración ambiental a la hora de constatar si determinadas inversiones realizadas en materia medioambiental se ciñen a las exigencias normativas ambientales establecidas, sobre emisiones a la atmósfera, vertidos a las aguas, así como producción, recuperación y tratamiento de residuos industriales, para poder beneficiarse de una deducción impositiva. Este pronunciamiento trae causa de la impugnación, por parte de Mercadona S.A., de la resolución del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, de fecha 24 de abril de 2006, desestimatoria del recuso de alzada deducido contra resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental, de fecha 9 de septiembre de 2005, denegatoria del certificado de convalidación de inversiones en materia medioambiental por entender que la inversión realizada afecta a residuos comerciales y no a residuos industriales, como exige el artículo 38 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Ante esta realidad, la parte demandante invoca la falta de competencia de la Administración medioambiental, para denegar la certificación de convalidación de las inversiones realizadas por Mercadona S.A., alegando que dicha certificación solo ha de entrar a valorar si la inversión se ha llevado a cabo en ejecución de planes, programas, convenios o acuerdos aprobados o celebrados con la Administración competente en materia medioambiental. La Sala no comparte la tesis interpretativa de la demanda ya que, de acuerdo con una interpretación sistemática de la normativa aplicable, es necesario que la Administración competente también certifique sobre el requisito considerado principal, que es que la inversión se realice para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia del medio ambiente sobre emisiones a la atmósfera, vertidos a las aguas, así como producción, recuperación y tratamiento de residuos industriales o para mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa. De manera que la propia norma tributaria llama a la Administración ambiental para certificar si, de acuerdo con la normativa ambiental, la inversión se realiza en relación con alguno de los supuestos previstos en la norma tributaria.

Por otro lado, en el ámbito de las actividades clasificadas nos encontramos con la *STSJ Cataluña 2/2010, de 4 de enero*, que resuelve un recurso de apelación contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Barcelona en la

que se desestimaba el recurso formulado contra la resolución dictada el 25 de julio de 2003 por el Alcalde de Rubí y la ejecución forzosa de la suspensión provisional de la actividad de depósito controlado de residuos dispuesta en la primera resolución. Esta primera resolución acuerda: en primer lugar, iniciar expediente de comprobación y corrección de las deficiencias de la actividad de depósito controlado de residuos inertes en el paraje de can Carreras s/n; en segundo lugar, requerir a la empresa para que en el plazo máximo de seis meses realice las medidas correctoras que se determinan en la resolución; en tercer lugar, adoptar como medida cautelar, la suspensión provisional de la actividad de depósito de residuos inertes hasta la corrección de los defectos citados. Al respecto, entre otras cuestiones, la parte apelante aprecia defecto en la sentencia apelada en cuanto a la normativa aplicable. La Sala resuelve no apreciando tal defecto ya que considera ajustado a derecho que la resolución recurrida se sustente a lo establecido en el artículo 36 y siguientes del RAMIN, que habilita al Alcalde para acordar en cualquier momento acciones que hagan que la actividad se ajuste a las exigencias del interés público, teniendo en cuenta que en ese momento la actividad no se había adecuando a lo establecido en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Intervención Integral de la Administración Ambiental, y que esta norma dedica el Título tercero a los sistemas de control e inspección de las actividades autorizadas conforme a la misma, pero no alcanza a las actividades ejercidas con licencias de actividad otorgadas durante la vigencia del RAMIN mientras no se hayan adecuando a las determinaciones de la Ley 3/1998.

La sentencia objeto de esta crónica decide estimar el recurso formulado contra la ejecución forzosa de la suspensión provisional de la actividad de depósito controlado de residuos desde el momento “que la resolución recurrida no recoge disposición alguna sobre la ejecución voluntaria de la orden de suspensión de la actividad, cuyo incumplimiento hubiera de llevar a la ejecución forzosa, cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la LPAC, las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos”.

Además, la parte apelante solicitó en el escrito de demanda una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la suspensión de la actividad. En relación a esta cuestión, la Sala no reconoce a favor del recurrente derecho a indemnización de daños y perjuicios debido a que se constata, a través de diferentes

informes, que la actividad “no se ajustaba a la licencia de actividad otorgada, en cuanto que admitía el depósito de residuos no comprendidos en el título habilitante”.

Els pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria ambiental realitzats des del començament de l'any 2010, que mereixen ser comentats per la seva transcendència, tenen una temàtica i problemàtica diverses que no permeten una agrupació per blocs. Per això, presentarem cadascuna de les sentències de manera singularitzada.

En matèria de planificació hidrològica ens trobem amb la *STSJ Catalunya 5/2010, de 4 de gener*, a resultes de la interposició per Endesa Generación S.A. d'un recurs contenciós administratiu contra l'acord adoptat el 4 de juliol de 2006 pel Govern de la Generalitat de Catalunya que aprova el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya. La part actora sol·licitava l'estimació del recurs declarant la nul·litat de ple dret o, subsidiàriament l'anul·lació del pla impugnat, tot basant-se en diverses consideracions jurídiques, entre altres, la incompetència de la Generalitat per fixar els cabals de manteniment i que el pla impugnat impedia a la part actora complir amb les obligacions derivades de la normativa del sector públic. Hem de saber, en relació al cas, que Endesa Generación S.A. té onze centrals hidroelèctriques en funcionament en les conques internes de Catalunya que es veuen afectades per les disposicions o determinacions del pla impugnat, començant pels cabals de manteniment i acabant per la taxa de canvi que impedeix que aquestes centrals puguin prestar serveis complementaris. També s'al·lega que s'impedeix el compliment del Pla de reposició del servei d'Aragó i Catalunya, aprovat per Red Eléctrica de España.

Respecte a tot plegat, la Sala no aprecia el defecte de competència que es denuncia, tot recordant que el Text Refós de la Llei d'Aigües estableix que els cabals ecològics es fixaran en els plans hidrològics de conca i que, en el Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya, s'estableix, en l'article 12, que el pla sectorial de cabals de manteniment l'han de redactar l'Administració hidràulica i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, amb l'objectiu de garantir un nivell admissible de desenvolupament de la vida aquàtica. En relació amb el motiu d'impugnació que assenyalava que el pla de cabals de manteniment impedeix a la part actora complir amb les seves obligacions de producció energètica i de prestació de serveis, la Sala, d'acord amb el Text Refós de la Llei d'Aigües, parteix del raonament de què els cabals ecològics o les demandes ambientals s'han de considerar com una restricció que s'imposa sobre qualsevol altra sistema d'explotació, sigui aquest hidroelèctric o no. A més, els arguments i la prova practicada per acreditar les repercussions per a Endesa

Generación S.A. de la fixació de la taxa de canvi de cabal, que esmorteïxi i atenuï els canvis en el règim de cabals manipulats, no afecten als motius que sustenten la seva previsió, que són, com en el cas de l'establiment de cabals ecològics, el manteniment de la vida piscícola que, de manera natural, habitaria o podria habitar en el riu, així com la seva vegetació de ribera.

En l'àmbit de la protecció de la biodiversitat destaquem la *STSJ Catalunya 76/2010, de 28 de gener*, que es dicta a conseqüència de la interposició del recurs contenciós administratiu 599/2006, per part de D. Adrián, contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, de 21 de desembre de 2005, desestimatòria de la reclamació formulada contra l'acord dictat per la Dependència Provincial de Duanes i Impostos Especials de Barcelona, mitjançant el qual s'imposa un sanció per infracció administrativa de contraban, en una quantia de 39.848,64 euros. En aquesta sentència, la Sala considera provat que, dels 216 exemplars de tortugues mediterrànies *Testudo Hermanni*, que tenia D. Adrián en la seva finca de Vilassar de Mar, 54 tortugues no havien estat criades en captivitat, sinó que eren objecte d'un tràfic il·lícit previ i, per tant, restava acreditada la tinença il·lícita de 54 exemplars de tortuga *Testudo Hermanni* no justificada pel propietari. En relació a la resta de tortugues no ha estat negat que alguns dels exemplars (dos en principi, i set o vuit, posteriorment) li haguessin estat regalats, ni que aquests exemplars hagin produït, per la seva banda, cries. A partir d'aquestes constatacions, es determina que l'article 11 en relació amb l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei Orgànica de la Repressió del Contraban considera com a infracció administrativa de contraban la realització, sense complir amb els requisits legalment establerts, de *operacions* d'importació, exportació, comerç, *tinença* o circulació d'espècimens de fauna i flora silvestres i les seves parts i productes, d'espècies recollides en el Conveni de Washington, de 3 de març de 1973, CITES, i en el Reglament (CEE) núm. 3626/82 del Consell, de 3 de desembre de 1982. Per tant, veiem que la infracció administrativa, segons la Sala, es consuma amb la mera tinença d'exemplars de determinades espècies sense complir amb els requisits legalment establerts. És evident que la pretensió que batega en el cor d'aquesta normativa és evitar que les operacions esmentades facin minvar les poblacions de flora i fauna en els seus hàbitats naturals, trencant així amb el seu equilibri ecològic, i acabin per posar algunes espècies a la vora de l'extinció.

En seu de residus, ens sembla important assenyalar la *STSJ Catalunya 98/2010, de 4 de febrer*, que corrobora el paper transcendent que ha de jugar l'Administració ambiental a l'hora de constatar si determinades inversions realitzades en matèria ambiental se ceneixen a les exigències normatives ambientals establertes, sobre emissions a l'atmosfera, vessaments a les aigües, així com la producció, recuperació i tractament de residus industrials, per poder beneficiar-se d'una deducció impositiva. Aquest pronunciament prové de la impugnació, per part de Mercadona S.A. de la resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de 24 d'abril de 2006, desestimària del recurs d'alçada deduït contra la resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental, de 9 de setembre de 2005, denegatòria del certificat de convalidació de inversions en matèria ambiental, per entendre que la inversió realitzada afecta a residus comercials i no a residus industrials, com exigeix l'article 38 del Reglament de l'Impost de Societats. Davant d'aquesta realitat, la part demandant invoca la manca de competència de l'Administració ambiental per denegar la certificació de convalidació de les inversions realitzades per Mercadona S.A., al·legant que aquesta certificació només ha d'entrar a valorar si la inversió s'ha dut a terme en execució de plans, programes, convenis o acords aprovats o celebrats amb l'Administració competent en matèria ambiental. La Sala no comparteix la tesi interpretativa de la demanda, ja que, d'acord amb una interpretació sistemàtica de la normativa aplicable, és necessari que l'Administració competent també certifiqui sobre el requisit considerat principal, que és que la inversió es realitzi per donar compliment a la normativa vigent en matèria de medi ambient sobre emissions a l'atmosfera, vessaments a les aigües, així com la producció, recuperació i tractament de residus industrials o per millorar les exigències establertes en aquesta normativa. D'aquesta manera, la mateixa norma tributària crida a l'Administració ambiental per certificar si, d'acord amb la normativa ambiental, la inversió es realitza en relació amb algun dels supòsits previstos en la norma tributària.

D'altra banda, en l'àmbit de les activitats classificades ens trobem amb la *STSJ Catalunya 2/2010, de 4 de gener*, que resol un recurs d'apel·lació contra una sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, en la que es desestimava el recurs formulat contra la resolució dictada el 25 de juliol de 2003 per l'alcalde de Rubí i l'execució forçosa de la suspensió provisional de l'activitat de dipòsit controlat de residus establerta en la primera resolució. Aquesta primera resolució

acorda: en primer lloc, iniciar l'expedient de comprovació i correcció de les deficiències de l'activitat de dipòsit controlat de residus inerts en el paratge de Can Carreras s/n; en segon lloc, requerir a l'empresa perquè en el termini màxim de sis mesos realitzi les mesures correctores que es determinen en la resolució; en tercer lloc, adoptar com mesura cautelar, la suspensió provisional de l'activitat de dipòsit de residus inerts fins la correcció dels defectes esmentats. En relació amb això, entre altres qüestions, la part apel·lant aprecia defectes en la sentència apel·lada pel que fa a la normativa aplicable. La Sala resol no apreciant aquest defecte, ja que considera ajustat a dret que la resolució recorregut se sostingui en allò que estableix l'article 36 i següents del RAMIN, que habilita l'alcalde per acordar, en qualsevol moment, accions que facin que l'activitat s'ajusti a les exigències de l'interès públic, tenint en compte que, en aquest moment, l'activitat no s'havia adequat a allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració ambiental, i que aquesta norma dedica el Títol tercer als sistemes de control i inspecció de les activitats autoritzades d'acord amb la mateixa Llei, però no abasta les activitats exercides amb llicències d'activitat atorgades durant la vigència del RAMIN, mentre que aquestes no s'hagin adequat a les determinacions de la Llei 3/1998.

La sentència objecte d'aquesta crònica decideix estimar el recurs formulat contra l'execució forçosa de la suspensió provisional de l'activitat de dipòsit controlat de residus des del moment en què la resolució recorreguda no recull cap disposició sobre l'execució voluntària de l'ordre de suspensió de l'activitat, l'incompliment de la qual hauria de dur a l'execució forçosa, quan de conformitat amb el que estableix l'article 95 de la LPAC, les administracions públiques, a través dels seus òrgans competents en cada cas, podran procedir, després de l'avís corresponent, a l'execució forçosa dels actes administratius.

A més, la part apel·lant va sol·licitar en l'escrit de demanda una indemnització pels danys i perjudicis patits com a conseqüència de la suspensió de l'activitat. En relació amb això, la Sala no reconeix a favor del recurrent dret a la indemnització de danys i perjudicis, ja que es constata, a través de diferents informes, que l'activitat no s'ajustava a la llicència d'activitat atorgada, en la mesura que admetia el dipòsit de residus no compresos en el títol habilitant.